

Popayán, 30 de diciembre de 2020.

Señores:

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL CAUCA – GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.**

E. S. D.

Ref.Proceso de responsabilidad fiscal PRF No. 80193-2020-36515.

Entidad: Universidad del Cauca.

Sustanciador: Victoria Eugenia Yacup.

Actuación: Versión Libre JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO.

De manera respetuosa me permito, presentar mi versión libre de la referencia, en los siguientes términos:

**PRIMERO.** - Hice parte de ASPU, la Asociación de Profesores Universitarios desde el momento de ingreso como profesor a la Universidad del Cauca, esto desde el 2 de febrero de 1996.

Lo que se presentó en los años que tuve responsabilidades académicas y de dirección institucional 2012-2017, fueron discusiones y debates de ideas entre los gremios universitarios y la dirección universitaria sobre las políticas que se debían implementar para desarrollar el proyecto universitario y algunos dirigentes sindicales han tratado de judicializar las diferencias ideológicas que se presentaron, por lo cual me permito solicitarle frente a este hecho, lo siguiente:

- se sirva requerir a la Universidad del Cauca - Oficina de Asuntos Laborales y/o a la Oficina Financiera, para que certifiquen desde y hasta cuando pertenecí a la Asociación Sindical de Profesores y he pagado mi cuota sindical. También para que remitan el oficio por mi presentado en donde solicite mi desvinculación.

El objeto de la prueba es acreditar que en mi identidad intelectual siempre ha habido un respeto y comprensión sobre la importancia de los sindicatos en la sociedad y que de manera alguna existieron conductas dolosas o graves, que implicaran violación a los derechos de asociación.

Lo anterior, aclarando Honorables Miembros de la Gerencia Departamental, que la anterior información fue solicitada también vía derecho de petición que se adjunta, con el soporte de envío, para que también sea tenido en cuenta en el decreto de pruebas.

**SEGUNDO.** - Durante el periodo rectoral (3 años), comprendidos entre el 22 de abril de 2012 hasta el 21 de abril de 2017, me correspondió ejercer, las relaciones con las de organizaciones sindicales que existen en la institución SINTRAUNICOL (Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad ) y ASPU (Asociación de Profesores de Universitarios), las cuales se produjeron en un contexto de respeto y camaradería; por parte de la rectoría siempre hubo el cumplimiento sistemático de las normas de consideración, por supuesto se produjeron controversias y enfoques diferentes frente a las numerosas iniciativas y propuestas planteadas por los sindicatos con la dirección universitaria; estas fueron resueltas usando los mecanismos institucionales; la rectoría que me tocó ejercer tuvo la oportunidad que por primera vez en la histórica del sindicato de profesores, dedicó parte del

presupuesto a construir una sede para la organización de la cual hoy disfrutaban afiliados y líderes sindicales, por lo cual me permito solicitarle frente a este hecho, lo siguiente:

- Se sirva requerir a la Universidad del Cauca - Vicerrectoría Administrativa para que remitan copia íntegra del proyecto que se ejecutó de la construcción de la sede para la Asociación de Profesores Universitarios seccional Cauca.

El objeto de la prueba es acreditar que fue la rectoría de aquel periodo quien ejecutó el proyecto por respeto a la asociación sindical y que de manera alguna han existido conductas dolosas o graves, que implicaran persecución a los sindicatos.

- Se sirva requerir a la Universidad del Cauca, para que remita las actas de negociación que SINTRAUNICOL y ASPU firmaron con la Universidad, en la cual se aclaran cuales puntos se aprobaron por la Administración Universitaria en los años que comprenden mi periodo rectoral 2012-2017.

El objeto de la prueba es acreditar, el profundo respecto por la actividad sindical, y el compromiso de la institución que representé, por atender los requerimientos que los sindicatos realizaron, pues con dichas actas se demuestra que la gran mayoría de peticiones que los sindicatos propusieron fueron aprobadas, por lo cual de manera alguna han existido conductas dolosas o graves, que implicaran persecución a los sindicatos.

- Solicito, se decreten los testimonios de: Fredy López, responsable de la Oficina de Planeación de la Universidad del Cauca; la Dra. Paloma Muñoz, vicerrectora de cultura y bienestar; el Dr. Edgar Velásquez Rivera, vicerrector académico, la Dra. Janeth Noguera, vicerrectora administrativa en ese entonces, Luis Carlos Ayala y Zoraida Ramírez; para que, bajo la gravedad de juramento, rindan su testimonio al Despacho, frente al proyecto de sede sindical, y de las constantes negociaciones que cada año se realizaron con ASPU.

Lo anterior, para que narren con detalle los ambientes en que se desarrollaron las relaciones con el sindicato de profesores y el sindicato de trabajadores; y describan las instrucciones que la rectoría daba en relación con las diferentes actividades y acciones institucionales que tenían que ver con los sindicatos.

- Solicito, se decrete el testimonio de la profesora Elizabeth Muños, para que en su calidad de ex Vicerrectora de Cultura y Bienestar y afiliada a ASPU, narre las políticas universitarias que se implementaron para favorecer la actividad sindical y la calidad de las relaciones que se mantuvo con estas organizaciones por parte de la dirección universitaria.
- Solicito finalmente en este punto, previo a oficiar a la Universidad para que suministré los nombres del Presidente y Vicepresidente del sindicato durante mi periodo rectoral, se escuche el testimonio ellos, para que, bajo la gravedad de juramento, rindan su testimonio al Despacho, frente a las relaciones que se llevaron a cabo durante mi periodo rectoral y otros aspectos relacionados con los mismos.

El objeto de la prueba testimonial, es acreditar que, durante mi periodo rectoral, siempre hubo respeto a la asociación sindical y que de manera alguna han existido conductas dolosas o graves, que implicaran persecución a las actividades sindicales. La intensión que siempre se tuvo fue discutir un tema, el de la profesora GLORIA CECILIA ARBOLEDA, quien había permanecido largos años en comisión sindical en la ciudad de Bogotá. Los diversos sectores de la Universidad del Cauca se preguntaban y requerían a la administración de la institución, no solo al rector, que se expusiera la situación públicamente para su respetiva evaluación.

Lo anterior, aclarando Honorables Miembros de la Gerencia Departamental, que la información respecto de la copia íntegra del proyecto, ya fue solicitada también vía derecho de petición que se adjunta, con el soporte de envió, para que también sea tenido en cuenta en el decreto de pruebas.

**TERCERO.** — La sanción que recibió la Universidad del Cauca por parte del Ministerio de Trabajo-Territorial del Cauca, hoy objeto de investigación fiscal, no se decidió después de haber investigado a una o varias de las autoridades que existen en la Universidad del Cauca de forma individual, sino que se produjo después de haber investigado a la Universidad del Cauca como ente jurídico empleador, es decir como persona jurídica, y representada legalmente por el suscrito para ese entonces; pues como puede apreciarse, con las pruebas obrantes en el proceso, pese haber terminado mi periodo rectoral, el 22 de abril de 2.017, el proceso continuo, produciéndose el 26 de abril de 2.018 la Resolución No. 118, que sancionó a la Universidad del Cauca, representada para esa fecha y actualmente por el Doctor JOSE LUIS DIAGO FRANCO, quien en adelante asumió la defensa de la Universidad en ese tema; pues a través del abogado LUIS EDUARDO CORDOBA, presentó alegatos de conclusión (que fue el mismo argumento utilizado en los descargos) e interpuso finalmente recurso de apelación contra dicho acto administrativo, el cual fue resuelto por la Dirección Territorial del Departamento del Cauca, mediante Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2.019, que confirmó la decisión de primera instancia.

Es importante aclarar en este hecho, que la Universidad del Cauca, no agotó los mecanismos judiciales, ante la jurisdicción contencioso administrativa, esto es la acción de nulidad contra la decisión proferida por la Dirección Territorial del Departamento del Cauca, pues mediante el oficio No. 2.5./227 del 1 de abril de 2.019, la oficina jurídica, en cabeza de la abogada YONNE GALVIS AGREDO, presentó a la Vicerrectoría Administrativa solicitud de CDP, para el cumplimiento de sanción dentro del proceso administrativo de carácter sancionatorio adelantado por el Ministerio de Trabajo - Dirección Territorial del Cauca, por lo cual la División de Gestión Financiera de la Universidad, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. D412-201900978 del 03 de abril de 2.019, para tal fin.

Mediante Resolución No. 267 del 8 de abril de 2.019, se acata la medida administrativa de carácter sancionatorio, y se ordena el pago de la sanción, por la suma de \$31.249.680- que corresponde a los 40 salarios-. Dicho acto administrativo es proyectado por el abogado que asumió la defensa en la querella administrativa conforme ya se expuso, es revisado y aprobado por la Jefe de la Oficina Jurídica, y firmado por la Rectora Delegataria de la Universidad del Cauca, CIELO PEREZ SOLANO.

Finalmente, la Universidad del Cauca, paga la sanción, mediante comprobante de pago a terceros No. 201900016 del 09 de abril de 2.019; por lo cual me permito solicitarle frente a este hecho, lo siguiente:

- Se sirva requerir a la Universidad del Cauca, para que certifique por qué razón no se hizo efectiva la póliza de protección al patrimonio de la Universidad, para realizar el pago de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo.
- Certifique la razón por la cual no se agotaron los mecanismos judiciales, para controvertir la decisión tomada por la Dirección Territorial del Departamento del Cauca, mediante Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2.019, que confirmó la decisión de primera instancia, frente a la sanción impuesta a la Universidad del Cauca.
- Remita copia del expediente administrativo que contenga todas las actuaciones desplegadas por la Universidad del cauca, dentro de la querella administrativa laboral presentada por el señor LUIS REINEL VASQUEZ ARTEAGA, en calidad de Presidente Seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios- ASPU-.
- Se remita copia del oficio No. 2.5./227 del 1 de abril de 2.019, por medio del cual la oficina jurídica presentó a la Vicerrectoría Administrativa solicitud de CDP, para el cumplimiento de sanción dentro del proceso administrativo de carácter sancionatorio adelantado por el Ministerio de Trabajo - Dirección Territorial del Cauca.
- Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. D412-201900978 del 03 de abril de 2.019, expedido por la División de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.
- Remita copia de la póliza, que amparó este tipo de eventos.
- Se escuche el testimonio de JAVIER PAZ- en calidad de operador de Seguros Confianza, citable la carrera 7 # 2-56 teléfono 8242361 extensión 01, celular número 3155426211, con el propósito de que explique los contenidos y obligaciones que tiene o tenía el contrato de seguro que formalizó la Universidad del Cauca con la empresa de seguros mencionada en relación con las decisiones adoptadas por la Universidad del Cauca.

El objeto de la prueba es acreditar que la Universidad del Cauca, pese a tener conocimiento de la póliza que amparaba el tipo de decisiones que se adoptó por parte de la entidad, no agotó las instancias judiciales, ni hizo efectivo el pago de la sanción a través de la misma, sino que optó por realizar el pago con recursos de la entidad.

Lo anterior, aclarando Honorables Miembros de la Gerencia Departamental, que la información solicitada también se solicitó, vía derecho de petición que se adjunta, con el soporte de envío, para que también sea tenido en cuenta en el decreto de pruebas.

**CUARTO.** —El gobierno universitario, en la Universidad del Cauca, es un sistema complejo; Como lo prescribe la ley 30 de 1993, el rector es elegido por el Consejo Superior de la Universidad con el propósito de ser el REPRESENTANTE LEGAL

DE LA INSTITUCION. Las funciones del rector están claras en los Estatutos, hay autoridades académicas como el Consejo Académico, que toman decisiones que tienen impacto en la actividad administrativa y el Consejo Superior, la máxima autoridad institucional, tiene funciones académicas y administrativas. *Es tan especial la gobernabilidad en la Universidad que el nominador de los profesores es el Consejo Superior y el nominador de los empleados administrativos es el Rector.*

Lo anterior es bien importante tenerlo en cuenta, a la hora de evaluar el tema de los gestores fiscales en la Universidad del Cauca. El rector como funcionario o la rectoría como órgano no es la máxima autoridad de la institución, como suele ocurrir en otras instituciones de orden nacional o de orden departamental. De allí que el Consejo Superior tiene, entre sus funciones, servir de control en apelación de las decisiones del rector que sean susceptibles de este recurso. De esta forma como ha sido sustanciado debidamente en el proceso de la referencia la decisión del rector fue evaluada y confirmada por el Consejo Superior; por lo cual me permito solicitarle frente a este hecho, lo siguiente:

- Oficiar a la Universidad del Cauca, para que remita copia del expediente que contiene, la estructura orgánica y los diferentes estatutos y normas que expresen las funciones de los órganos y los directivos.
- Certifique quienes eran los miembros del Consejo Superior en el momento de decidir la legalidad del acto administrativo emitido por la rectoría, respecto a la suspensión del permiso sindical de la docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA, indicando a que sectores representaban.
- Se recepcione el testimonio de RAFAEL EDUARDO VIVAS y HUGO MUÑOZ, miembros del Consejo Superior de las Universidad en mi periodo rectoral, para que testifiquen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se tomó la decisión de suspender del permiso sindical de la docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA.

El objeto de la anterior prueba, es acreditar, el sistema de gobierno de la institución, en aras a que se pueda constatar que una decisión de una autoridad institucional como el rector en relación a un profesor se produce en un contexto de dialogo y consulta; tratando de buscar consensos y aplicar las mejores metodologías para el funcionamiento institucional.

Lo anterior, aclarando Honorables Miembros de la Gerencia Departamental, que la información solicitada también se solicitó, vía derecho de petición que se adjunta, con el soporte de envió, para que también sea tenido en cuenta en el decreto de pruebas.

**QUINTO.** — Frente al acto administrativo, esto es la Resolución No. 951 del 03 de diciembre de 2.014, por medio del cual se suspendió el permiso sindical de la profesora GLORIA CECILIA ARBOLEDA, el cual fuere proyectado por la abogada SONIA EUGENIA PAJOY, y que firmé como representante legal de la Universidad, tuvo una fundamentación jurídica acompañada de soportes<sup>1</sup>, que motivaron el acto administrativo, y que respetaron el debido proceso de la docente, pues una vez expedido, fue debidamente notificado, y en virtud de ello la docente interpuso los

---

<sup>1</sup> Oficio No. 194466 del 10 de noviembre de 2.014, que emana del Ministerio de Trabajo a través de la Coordinadora del Grupo Archivo Sindical, en donde se certifica que en el depósito de la Junta Directiva no aparece el nombre de la Dra. GLORIA CECILIA ARBOLEDA, entre otros.

recursos de ley, que finalmente fueron resueltos por el suscrito (el de reposición<sup>2</sup>) y por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca (el de apelación), mediante decisión contenida en la Resolución No. 024 del 20 de mayo de 2.015, que confirmó la decisión de suspender el permiso sindical y que fuere proyectada por la abogada Carolina Aramburo.

Esta decisión de suspender el permiso sindical fue un acto administrativo motivado por la rectoría de la Universidad del Cauca, en su elaboración participó el equipo jurídico de la institución y por competencia fue firmado por este servidor, conforme ya lo expuse; y con el cual me sometí a diversos cuestionamientos y críticas de varios docentes, estudiantes y administrativos; la filosofía que tenía era de lograr conversar con la profesora desde el punto de vista institucional sobre la situación especial que tenía de disfrutar un permiso sindical fundamentado en un acto administrativo que se consideraba no reunía las características que la ley laboral, la jurisprudencia y la doctrina requieren sobre este tipo de situaciones administrativas. No era **un acto definitivo** ni por la competencia del rector ni por la misma connotación de **SUSPENDER**. Por la competencia porque el acto administrativo debía superar la evaluación jurídica que tenía que hacer el jefe del rector y jefe de la profesora que es el Consejo Superior Universitario y por estrategia institucional pues no se revocó el acto administrativo, sino que se suspendió con el propósito que se siguiera una discusión institucional y los diferentes grupos universitarios que requerían la evaluación de la situación administrativa pudieran expresar sus opiniones; como era lógico y siguiendo las normas del debido proceso la profesora GLORIA CECILIA ARBOLEDA apeló la decisión ante el Consejo Superior, compuesto por nueve miembros, quienes tienen asesores jurídicos especiales, como es el caso del representante del Presidente de la República y el representante del Ministerio de Educación ellos después de varios meses de análisis con sus asesores de Presidencia y del Ministerio, CONFIRMARON LA DECISION DE SUSPENDER EL PERMISO SINDICAL. Surgen algunos interrogantes del trámite descrito ¿hay responsabilidad fiscal en la decisión de los 9 miembros del Consejo Superior Universitario? ¿Los asesores jurídicos de la presidencia y del Ministerio de Educación Nacional al valorar la situación actuaron de forma irresponsable? ¿Cumplió el Consejo Superior con sus Competencias o las extralimitó? Deseo agregar que el tema fue motivo de dialogo, conversación y análisis de todos los espacios universitarios en aquel momento y la percepción que se tenía era que la situación administrativa que disfrutaba la profesora no era regular.

Adicionalmente, en los actos administrativos se observa que el asunto ha sido tratado por el Consejo de Estado, considerando que es irregular un permiso sindical del 100%, conforme lo argumentado en los actos administrativos expedidos por la Universidad.

Es pertinente preguntar, entonces: ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de la decisión de suspender el permiso sindical de la profesora Gloria Cecilia Arboleda? ¿Solamente el rector? ¿Los nueve miembros del Consejo Superior? Una decisión administrativa fundamentada en derecho, producida cumpliendo unas competencias, con propósitos institucionales razonables que fue evaluada en una primera instancia de tutela por un juez constitucional quien también planteó que el procedimiento se hizo de forma correcta y que tanto rector como Consejo Superior cumplieron específicamente con sus responsabilidades, que quienes disintieron tuvieron todos los mecanismos constitucionales para

---

<sup>2</sup> Mediante Resolución No. 283 del 13 de abril de 2.015.

controvertir en derecho sus propios puntos de vista. ¿Puede una discusión jurídica convertirse en falta fiscal? ¿Se le debe abrir un proceso fiscal a la juez de tutela que en primera instancia le dio la razón a la Universidad del Cauca y a la decisión que ahora y controvierte? Se puede decir que durante toda la controversia no hubo en el trámite de la decisión ninguna controversia sobre la competencia o sobre los fundamentos jurídicos de la decisión; por lo cual, frente a este hecho, me permito solicitarle lo siguiente:

- Oficiar a la Universidad del Cauca, para que remita el expediente que integran el proceso administrativo que se estructuró referente a la profesora Gloria Cecilia Arboleda desde el acto administrativo de suspensión hasta la decisión del Consejo Superior de decidir la petición de apelación que la profesora realizó.
- Recepcionar los testimonios de las abogadas SONIA EUGENIA PAJOY y CAROLINA ARAMBURO, personas que proyectaron los actos administrativos que suspendieron el permiso sindical de la profesora GLORIA CECILIA ARBOLEDA.

El objeto de las anteriores pruebas, tienen como propósito que usted pueda hacerse una idea como se produjo la discusión sobre el tema y la seriedad con que cada uno de los funcionarios asumió el análisis de la situación.

Lo anterior, aclarando Honorables Miembros de la Gerencia Departamental, que la información solicitada también se solicitó, vía derecho de petición que se adjunta, con el soporte de envío, para que también sea tenido en cuenta en el decreto de pruebas.

**SEXTO.** —Otra situación de mucha relevancia, que no conoce la Contraloría, pero que está documentado en el proceso académico y administrativo de la Universidad del Cauca es que la resolución de suspensión del permiso es de diciembre de 2014, pero la misma no se hizo efectiva inmediatamente, pues la profesora GLORIA ARBOLEDA durante el primer semestre de 2015, no asumió labor académica alguna, se consideró pertinente hacer eso porque se tenía la claridad que el que tenía en última instancia la decisión, era el Consejo Superior y sus miembros tomaron la decisión de hacer un estudio juicioso del tema. De tal forma que no hubo interrupción de la actividad sindical de la profesora; por lo cual, frente a este hecho, me permito solicitarle lo siguiente:

- Solicito respetuosamente, se recepcione el testimonio del profesor EDGAR VELASQUEZ RIVERA - en calidad de Vicerrector Académico en aquel entonces y al Decano en aquella época de la Facultad de Derecho ROBERTO RODRIGUEZ, para que den su testimonio sobre la labor académica de la profesora durante el periodo de “controversia” y si ella tenía que cumplir horario o se le impidió asistir a sus compromisos sindicales durante el periodo.
- Se oficie a la Universidad del Cauca, para que certifique las actividades académicas desarrolladas por la docente GLORIA ARBOLEDA, durante el periodo comprendido abril a septiembre de 2015.
- Remita copia de la Resolución 931 del 3 de diciembre de 2014, la resolución 283 de abril 13 de 2015, la resolución 024 de mayo 20 de 2015 y copia del

oficio del 5 de junio de 2015 suscrito por ROBERTO RODRIGUEZ Y EDGAR VELASQUEZ RIVERA.

- Remita acta del departamento de derecho laboral donde se deja constancia que deben recomponer la labor académica de la profesora por orden del Consejo Superior y por los ejecutores de esta orden vicerrector académico y decano de la facultad.

Las anteriores pruebas, tiene como propósito, constatar que desde diciembre de 2014 hasta el 5 de julio de 2015 la profesora Gloria Arboleda continuó realizando sus actividades sindicales sin ninguna interrupción y que el oficio del decano y vicerrector era cumpliendo una orden del Consejo Superior de la Universidad del Cauca, que ninguna llegó a ejecutarse pues en agosto de 2015, mediante fallo de tutela proferida por el Tribunal del Cauca en segunda instancia, se revocó las decisiones de la universidad del Cauca.

Al respecto es necesario requerir a la Universidad allegue el permiso sindical referencia del acto administrativo de suspensión de la docente, para que se observe que se trata de un permiso sindical casi sin límites de temporalidad y equivalente a casi el 100% de tiempo.

**SÉPTIMO.** —Es importante aclarar a la Contraloría que he tenido la oportunidad de ser directivo universitario y durante el cumplimiento de mis funciones como decano 2009-2012 y como rector 2012-2017, por competencia debí evaluar el desempeño de la profesora GLORIA CECILIA ARBOLEDA, siempre y en todo momento le ubiqué evaluaciones numéricas positivas lo que muestra una clara tranquilidad en la relación personal y como autoridad administrativa-académica de la institución, por lo cual frente a este hecho, me permito solicitarle:

- Oficiar a la Universidad del Cauca, para que remita a su despacho las evaluaciones que como directivo realicé sobre el desempeño de la profesora Gloria Cecilia Arboleda.

La anterior, prueba tiene como objetivo acreditar que en el debate interno institucional que se realizó sobre su comisión sindical nunca hubo ningún ánimo de persecución o mala intención.

**OCTAVO.** —Respecto al proceso administrativo disciplinario que el Ministerio del Trabajo adelantó contra la Universidad del Cauca se puede analizar que de ninguna forma se individualizó al rector de la Universidad del Cauca para hacer la investigación, antes por el contrario muchos de los hechos presentados como persecución por parte de los directivos de la Asociación fueron desestimados e incluso muchos de ellos no fueron probados durante el trascurso de la investigación; lo que se evidencia es que se formularon dos cargos contra la Universidad del Cauca, el primero que tienen que ver con el derecho que tienen los dirigentes a tener permiso sindical el cual prosperó pero esto no significa que el rector fuera responsable de ello, sino la Universidad del Cauca como persona jurídica y todos sus órganos de gobierno y autoridades en general quienes actuaron con la responsabilidad de defender la legalidad institucional y con la convicción legítima, basada en jurisprudencia del Consejo de Estado e incluso respaldada jurídicamente por el Juez Constitucional de Primera instancia.

El cargo número dos, que no prosperó, que tiene que ver con la acusación fiscal que hacen los directivos sindicales por LA VIOLACION DEL DERECHO DE



ASOCIACION, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLETIVA por el cual no fue sancionada la Universidad del Cauca, es más para desestimar el cargo el Ministerio del trabajo consideró en su decisión: *“Es importante recalcar que el análisis del recaudo probatorio obrante en el expediente, documentos y testimonios, no permite evidenciar y concluir al despacho, más allá de toda duda, que los comportamientos y conductas del empleador UNIVERSIDAD DEL CAUCA expuestos en el radicado 1450 de mayo 25 de 2015 en comunicado suscrito por el presidente de ASPU Cauca, así como en los testimonios que se recepcionaron en el transcurso de la presente investigación administrativa, se efectuaron con animus, propositivo tendientes a impedir o afectar el ejercicio de asociación de la organización sindical ASPU, seccional Cauca, por el cual el presente cargo no está llamado a prosperar”*.

Es de resaltar, para que la contraloría lo analice y se haga una idea del contexto de la controversia, como asumió la actual administración de la Universidad del Cauca la defensa de la institución en el proceso administrativo disciplinario que le siguió el Ministerio del Trabajo; al momento de salir el fallo no se presentó un documento de apelación donde se mostraran los hechos y las pruebas de forma contundente que refutaran que no hubo *animus* de menoscabar los derechos de asociación sindical al SUSPENDERLE el permiso sindical a la profesora Gloria Arboleda, además de demostrar que finalmente no se hizo efectiva la decisión por lo que no existió el hecho. Se podía haber mostrado plenamente que nunca asumió labores académicas-administrativas que le impidieran el desarrollo de su actividad sindical desde diciembre 3 de 2014 a julio de 2015, ni siquiera se logró hacer realidad la orden del Consejo Superior de asignarle labor académica a la profesora; como tampoco se llamó en garantía a la empresa aseguradora denominada CONFIANZA con la cual la Universidad tenía o tiene un seguro que cubre este tipo de eventos jurídicos que la institución tiene como riesgo en su funcionamiento administrativo.

Más grave aún la Universidad del Cauca no ha presentado la acción de nulidad del acto administrativo sancionatorio, omitiendo la labor de defensa de los intereses de la Universidad, conforme ya se indicó, por lo cual, frente a este hecho, de manera respetuosa le solicito:

- Se oficie al Grupo de Prevención, Vigilancia, Control, Resolución de Conflictos - Conciliación de la Dirección Territorial Cauca - Ministerio del Trabajo, para que remita copia del expediente digital donde consta el proceso Administrativo Laboral contra la Universidad del Cauca con ocasión de la Querella Administrativa Laboral, interpuesta por Luis Reinel Vásquez Arteaga, en calidad de Presidente Seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU, bajo el radicado 1165 del 28 de abril de 2015, a fin de que obre como prueba trasladada dentro del proceso, pues en dicho proceso se tomaron testimonios con los que se puede esclarecer los hechos hoy objeto de investigación y que puede ser ratificados y ampliados dentro de la presente investigación.
- Se sirva oficiar al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán ©, para que remita con destino a este proceso, copia íntegra del expediente de la acción de tutela que se tramitó en ese Despacho, bajo el radicado No. 19001 3333 008 2015 00216 00 - Accionante: PEDRO HERNANDEZ CASTILLO Y OTRO - Demandado: Universidad del Cauca.

**NOVENO.** —Finalmente, me permito colocar en conocimiento del Despacho, que mediante providencia del 22 de diciembre de 2.020, el Procurador Regional del Cauca, ANDRÉS RENE CHAVES FERNÁNDEZ, resolvió frente a la indagación preliminar que cursó en ese despacho, bajo la radicación IUS-E:2019-461515/IUC-

D-2019-1389439- implicado: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO- Quejoso: Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU- ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo en el proceso adelantado en mi contra, dado que no encontró que con las actuaciones desplegadas en virtud de la suspensión sindical de la docente GLORIA ARBOLEDA, hubieren existido conductas u omisiones dolosas o gravemente culposas. Así queda plasmada la motivación de la providencia:

*“(…) En el caso en concreto, se observa que el implicado, expidió el acto administrativo que suspendió el permiso sindical de la docente GLORIA ARBOLEDA, pero el mismo fue confirmado por el Consejo Superior de la Universidad, siendo un cuerpo colegiado, conformado incluso por representantes del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación. Las decisiones tomadas por ambos entes, cumplió con los requisitos legales para la expedición de un acto administrativo, fue motivado y fundado en normas, jurisprudencia y doctrina.*

*Para este despacho resulta evidente que el asunto se trata de interpretaciones jurídicas y que existen posturas, basadas en tratados, normatividad y jurisprudencia, lo que hace que la decisión se haya tomado por el Rector y por el Consejo Superior, con la convicción de hacerlo dentro de la legalidad.*

*Con esto, se puede afirmar que no se encuentra que la conducta haya sido **dolosa o gravemente culposa**, puesta se tomó basada en derecho, sin que se pueda observar de las actuaciones que sirvieron de base para la sanción del Ministerio de Trabajo Territorial Cauca, conductas u omisiones dolosas o gravemente culposa.*

#### **Otra decisión:**

*Adicionalmente, se observa que la decisión del Ministerio del Trabajo, pudo ser demandada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, así como la existencia de una presunta póliza que ampara las decisiones administrativas, las cuales al parecer no han sido ejercidas por la Universidad a fin de **evitar detrimento patrimonial**.*

**Por esas razones, y ante la falta de gestión por parte de la Administración Universitaria de evitar el detrimento patrimonial que sufrió la entidad, este despacho compulsara copias para que se investiguen las actuaciones mencionadas (...)** Negrilla y resaltado fuera de texto.

En virtud del anterior hecho, me permito solicitarle al Despacho, lo siguiente:

- Se sirva oficiar al Procurador Regional del Cauca, ANDRÉS RENE CHAVES FERNÁNDEZ, para que remita copia íntegra de la indagación preliminar No. IUS-E:2019-461515/IUC-D-2019-1389439- implicado: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO- Quejoso: Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-, para que obre dentro del proceso como prueba traslada.

### **SOLICITUDES**

De manera respetuosa me permito antes de formular mis peticiones, manifestar que si bien es cierto por cada hecho solicite pruebas dentro de mi versión libre, de conformidad con el artículo 24 de la ley 610 de 2.000, solicitó que esta petición de pruebas se tengan como petición subsidiaria en caso de no prosperar la principal; pues mi principal petición es que se de aplicación a lo estipulado en el artículo 16

de la ley 610 de 2.000, modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, que hace referencia, a la cesación de la acción fiscal.

Lo anterior, teniendo como soporte la providencia del 22 de diciembre de 2.020, en donde el Procurador Regional del Cauca, ANDRÉS RENE CHAVES FERNÁNDEZ, resolvió frente a la indagación preliminar que cursó en ese despacho, bajo la radicación IUS-E:2019-461515/IUC-D-2019-1389439- implicado: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO- Quejoso: Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU- ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo en el proceso adelantado en mi contra, dado que no encontró que con las actuaciones desplegadas en virtud de la suspensión sindical de la docente GLORIA ARBOLEDA, hubieren existido conductas u omisiones dolosas o gravemente culposas, conforme ya expuso. Este tipo de evento, al tenor del artículo ya citado, permite a su Honorable Despacho, cesar la acción y ordenar al archivo del proceso, pues con el fallo se puede establecer que el hecho no es constitutivo de daño patrimonial, por cuanto los actos administrativos, fueron motivados y fundados en normas, jurisprudencia y doctrina, con las cuales se actuó con la convicción de hacerlo dentro del marco de la legalidad.

Ahora bien, si se demuestra con las actuaciones desplegadas por la actual administración de la Universidad del Cauca, en el tema que hoy nos ocupa, que si se causó el detrimento patrimonial, dada la falta de gestión para evitarlo, pues no se hizo efectiva la póliza que ampara las decisiones administrativas; sino que se realizó el pago con recurso de la entidad; aunado a que no se adelantaron las acciones judiciales tendientes a nulitar la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo.

Finalmente, le solicito de manera respetuosa, en caso de que no prospere la solicitud principal, vincular como presuntos responsables fiscales al Consejo Superior de la Universidad del Cauca de la época de mi periodo rectoral, al presente proceso, para los efectos pertinentes.

Atentamente,



**JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO**

C. C. No. 6.893.441 de Montería.